

Agosto 2016

Asegurar la Paz en las Fronteras: una Estrategia Post-Acuerdo para Colombia

Dr Annette Idler



FARC graffiti



El abandono en zonas fronterizas

Policy Brief

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos violentos no-estatales están profundamente arraigados en las zonas fronterizas de Colombia.

La incertidumbre acerca de lo que sucede en las fronteras después del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC debe abordarse en el caso en el que una paz duradera sea lograda.

Una estrategia integral post-acuerdo para Colombia requiere un enfoque particular en las zonas limítrofes donde necesitará desarrollarse:

- **Del abandono del Estado al desarrollo sostenible.**
- **De la inseguridad producida por múltiples grupos violentos no-estatales a la seguridad ciudadana dirigida a la población.**
- **De la delincuencia organizada transnacional a las oportunidades transfronterizas económicas legales.**

Este informe de política pública expone los retos y acciones en estas tres áreas clave. La gestión de los riesgos y la incertidumbre sobre la seguridad civil en las zonas fronterizas en particular en el período inmediatamente posterior al acuerdo de paz es fundamental para la estabilidad a largo plazo del mismo. Este informe es el resultado de un estudio de las zonas fronterizas de Colombia llevado a cabo entre los años 2010 y 2016.

Negociaciones de Paz

El 24 de agosto de 2016, después de cuatro años de negociaciones de paz y más de cinco décadas de conflicto armado, se ha logrado un acuerdo de paz histórico entre el gobierno colombiano y las FARC, posterior a que ambas partes anunciaran un cese bilateral al fuego el 23 de junio del mismo año. Dicho acuerdo estipula que, dentro de los 180 días posteriores a la firma del mismo, las FARC deben deponer las armas, cesar la extorsión y otras actividades de financiación ilícita, y también detener el reclutamiento de civiles. Este acuerdo será aprobado por el electorado colombiano a través de votación popular.

Las Naciones Unidas (ONU) tiene el mandato de recoger las armas y supervisar el proceso de desarme, que tendrá lugar en específicas “zonas de normalización” y campamentos. Estas zonas incluyen cinco regiones cercanas a la frontera del país: La Paz (Cesar), Tibú (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y Arauquita (Arauca). Uno de los ocho campamentos designados también se encuentra localizado en la frontera: Fonseca en La Guajira. Las zonas de normalización, aseguradas por las Fuerzas Armadas de Colombia con un anillo de seguridad de un kilómetro, pueden ser utilizadas por los miembros de las FARC para prepararse para la reintegración a la vida civil. Las zonas dejarán de existir después de 180 días.

El 30 de marzo de 2016, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo insurgente más grande de Colombia, firmó un acuerdo marco en Caracas para lanzar formalmente las conversaciones de paz. Sin embargo, el gobierno colombiano se ha negado a iniciar las conversaciones ya que el ELN sigue participando en secuestros. En agosto de 2016, por ejemplo, el ELN supuestamente secuestró a 11 agricultores en el departamento de Arauca, y los tomaron como rehenes en Apure, Venezuela.

Regulando Zonas Fronterizas

Tanto las zonas fronterizas de Venezuela como las de Ecuador que limitan con Colombia son utilizadas por la guerrilla, paramilitares y otros grupos de derecha, así como grupos criminales, como lugar de retiro y operación, utilizando actividades transfronterizas económicas ilícitas como fuente de ingresos.

El 11 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron abrir la frontera entre los dos países, después de casi 12 meses de cierre. Los peatones fueron autorizados para cruzarla entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche hora de Venezuela. Del mismo modo, Bogotá y Caracas anunciaron la emisión de la documentación para las

personas que crucen la frontera, con el fin de controlar de manera adecuada quién entra y sale de los territorios.

Por otro lado, la frontera entre Colombia y Ecuador se encuentra abierta, pero su control se basa principalmente en medidas unilaterales por parte de los dos Estados. A finales de marzo de este año, los dos países anunciaron negociaciones para una fuerza militar conjunta con el fin de fortalecer la seguridad fronteriza con ocasión del acuerdo de paz. Sin embargo, todavía no se han hecho públicos planes concretos sobre este tema.

La regulación de las fronteras es una preocupación tanto para abordar el problema de las economías ilícitas locales como del control fronterizo.

1 Del abandono del Estado al desarrollo sostenible

Contexto

Históricamente, el Estado Colombiano ha abandonado las zonas fronterizas del país. Por la ausencia de instituciones estatales y de gobernabilidad efectiva, las guerrillas, los grupos de derecha y los grupos organizados ilegales han dominado durante décadas un sinnúmero de márgenes de Colombia, y con frecuencia han sustituido al Estado¹. Las FARC y el ELN proporcionan servicios básicos como sanidad, infraestructura vial, mecanismos de resolución de conflictos para resolver disputas entre vecinos y prevenir el robo, la violación y otros delitos. De igual modo, imponen reglas de comportamiento, tales como códigos de vestimenta y toques de queda, así como reglas para ayudar a las comunidades a regular la vida cotidiana - aunque sea por medios no democráticos.

En muchas zonas marginadas sin control estatal, la población agradece tener una fuente de orden para regular su vida cotidiana. Sin oportunidades económicas legítimas, las comunidades locales dependen de la siembra de coca y del contrabando. Los civiles adaptan sus vidas a la “ciudadanía en la sombra” que surge de la gobernabilidad por parte de grupos ilegales², creando así relaciones estrechas entre estos grupos y las comunidades.

La gente toma decisiones pragmáticas para apoyar a las FARC o al ELN. Esto es a menudo una cuestión de supervivencia, en lugar de una opción ideológica. Todavía no se sabe cómo estas relaciones complejas serán disueltas y reformadas en el período de post-acuerdo. Esto genera una gran incertidumbre.

Desafíos en el período post-acuerdo

- 1 Los agricultores tendrán nuevas quejas si son excluidos de los beneficios concedidos a los desmovilizados de las FARC, o si la aplicación de los acuerdos de paz (incluida la transformación del sector rural) se retrasa.
- 2 Después de haber tenido una estrecha relación con los miembros de la comunidad local, algunos ex combatientes de las FARC tendrán mayor legitimidad que los representantes del Estado central. Esto hará que sea difícil para el gobierno fortalecer los procesos democráticos a nivel local.
- 3 En los territorios donde ambos grupos insurgentes (FARC y ELN) operan, es probable que la población apoye el grupo que antes impuso las reglas de comportamiento y que cuidó a la comunidad. Este apoyo podría ser transferido a sus sucesores políticos.
- 4 ¿Cómo responderán los civiles? En ausencia de control social por parte de las FARC, los civiles pueden aumentar sus demandas e intensificar la movilización social. Por otro lado, en un contexto de incertidumbre y miedo, y después de haber sufrido décadas de un conflicto armado, podrían estar temerosos en apoyar una nueva agenda política.
- 5 A menos que también se logre un acuerdo con el ELN, este grupo y otros actores violentos no-estatales tratarán de llenar el vacío dejado por las FARC. Una lucha violenta por el poder supondría un perjuicio para el desarrollo sostenible.

PUTUMAYO

En Sucumbíos, Ecuador, los agricultores han sido llamados regularmente por las FARC para asistir a reuniones en el lado colombiano de la frontera, en las cuales se les ha informado acerca de la tasa actual de la vacuna, dinero producto de la extorsión que tenían que pagar en el lado ecuatoriano, además de informarles sobre lo que se debe cultivar en sus granjas en el lado colombiano. Como resultado, muchos agricultores han estado cultivando coca porque carecen de opciones económicas alternativas. Ni Bogotá ni Quito han tomado las medidas adecuadas para hacer frente a la extorsión. Dichas situaciones no sólo dependen de la jurisdicción de Colombia o Ecuador, también del intercambio de inteligencia. Otras formas de cooperación para la seguridad fronteriza binacional son débiles e insuficientes.

Acción para el Gobierno y la Comunidad Internacional

- 1 Invertir rápidamente en el desarrollo de capacidades para las comunidades marginadas. Realizar intervenciones estatales más sostenibles y mejorar el conocimiento de los derechos y los procesos participativos.
- 2 Entablar un diálogo con las comunidades locales y tomar en cuenta sus sugerencias de cómo consolidar una paz sostenible. La necesidad de este diálogo está prevista en los acuerdos de paz, por ejemplo, en los planes de desarrollo local. Tales actividades deben implementarse de forma estratégica, con un balance adecuado entre la eficacia y la necesidad de priorizar los recursos por un lado, y la legitimidad por el otro, mediante el uso de mecanismos inclusivos. El diálogo ayudará a manejar la incertidumbre y a aumentar la credibilidad del gobierno.
- 3 Comunicar directamente a las comunidades marginadas y explicar cómo las nuevas políticas y programas son financiera y prácticamente factibles.
- 4 Establecer una estrategia integral para la inversión en infraestructura que incentive las asociaciones público-privadas e invertir en proyectos de desarrollo en las regiones marginadas lo cual ayuda a transformar las economías ilícitas en opciones económicas legales viables.
- 5 Animar a la población colombiana, especialmente en Bogotá, a mostrar su solidaridad con los ciudadanos en las regiones marginales del país.

2 De la Inseguridad a la Seguridad Ciudadana

Contexto

En las zonas fronterizas de Colombia convergen el crimen y el conflicto. La combinación de las políticas de seguridad de Colombia, que han empujado el conflicto armado hasta los márgenes del país, y su ubicación estratégica en relación con el negocio global de la cocaína ha creado un cuadro complejo en el que diversos grupos violentos no-estatales operan.

En muchos territorios de las FARC en las zonas fronterizas de Colombia también opera el ELN. Por otra parte, una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL), un tercer grupo insurgente, sigue activa en la región del Catatumbo.

Las numerosas organizaciones involucradas en el tráfico de drogas y otras formas de crimen transnacional organizado están presentes, incluidos los grupos de derecha que evolucionaron a partir de los grupos paramilitares

desmovilizados entre 2003 y 2006. Algunos de ellos se han expandido en los últimos años. Por ejemplo, se conoce que carteles mexicanos operan en zonas fronterizas de Colombia.

Operando en las mismas zonas del territorio, varios de estos grupos violentos no-estatales han tenido que encontrar la manera de coexistir. Pueden unir sus fuerzas en alianzas estratégicas, o continuar con los tácitos acuerdos mutuos preexistentes³. La innumerable e inestable mezcla de grupos violentos no-estatales en estas regiones plantea serias amenazas a la seguridad en el periodo post-acuerdo.

Desafíos en el período post-acuerdo

- 1 Los civiles que viven en o cerca de las zonas de normalización, o de las áreas donde las FARC anteriormente operaban, pueden ser estigmatizados como sus colaboradores. Sin la protección de este grupo, son extremadamente vulnerables. La vida de los civiles está en riesgo si se exponen a la violencia de otros actores armados.
- 2 Los civiles corren el riesgo de ser castigados por otras organizaciones ilegales diferentes a las FARC, por participar en procesos percibidos como contrarios a los intereses de estos.
- 3 Los altos niveles de atención internacional y la presencia de observadores de la ONU en el lugar probablemente disuadirán acciones violentas en las zonas de normalización o cerca de ellas. Sin embargo, una vez que la Misión se retire y las zonas dejen de existir, la violencia puede retornar. Asimismo, quejas no resueltas pueden alimentar los actos de represalias por parte de otros grupos armados contra los ex combatientes.
- 4 En el periodo inmediato post-FARC es posible que haya más violencia, debido a que los grupos armados de todo el espectro político luchan para ocupar el lugar de las FARC. La vida para la población local será extremadamente inestable hasta que quede claro quién es el nuevo agente regulador. En muchas partes del país, estas terceras partes pueden tener mejores condiciones si el Estado llena los vacíos de poder dejados por las FARC y, potencialmente, por el ELN.
- 5 Los ex miembros de las FARC serán vulnerables al reclutamiento (por la fuerza o voluntariamente) por otros grupos violentos no-estatales. Como resultado de ello, grupos como el ELN se pueden fortalecer.
- 6 Si el discurso público tilda de criminales a todos los grupos violentos ilegales, las agendas políticas, que

impactarán en las vidas de la población local, corren el riesgo de ser ignoradas. Del mismo modo, la reducción de todos los problemas de seguridad a los riesgos de “criminalidad”, estigmatiza a las personas que están atrapadas en ese sistema y que no tienen otra alternativa.

- 7 Existe el riesgo de que las fuerzas armadas no sean suficientemente ágiles para responder a las nuevas demandas del tratado de paz. Los retos en la reintegración a la vida civil a los que se enfrentan antiguos guerrilleros también los experimentarán algunos militares. Es posible que el gobierno trate de impulsar la eficiencia a través de la transformación estructural de sus fuerzas armadas. Este proceso de transformación puede experimentar una falta de coordinación con otras instituciones del gobierno.
- 8 Las élites locales que pueden perder el poder como resultado de los acuerdos de paz podrían incentivar las organizaciones ilegales a desestabilizar el acuerdo de paz e impedir las intervenciones estatales.

ARAUCA

Arauca (que incluye la zona de normalización de Arauquita) tiene que prepararse para un fortalecimiento potencial del ELN y un recrudecimiento de la violencia. Entre los años 2006 y 2010, el ELN y las FARC se encontraban en guerra en este Departamento. Después de una lucha brutal durante estos años, decidieron realizar un pacto de no agresión y ahora comparten el territorio, pero la desconfianza aún persiste. El ELN tiene más poder político, aquí, y también influencia entre las autoridades gubernamentales en la capital Arauca, incluyendo corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia Venezuela. El ELN puede aprovechar la oportunidad para atacar a los ex combatientes de las FARC y recuperar el control, o simplemente expandir su área de dominio a través de la cooptación de los partidarios de las FARC. Por otra parte, aquellos miembros ex-FARC que no estén dispuestos a deponer las armas pueden optar por unirse al ELN en lugar de integrarse en la vida civil.

Acciones para el gobierno y la comunidad internacional

- 1 Identificar la dinámica entre las diferentes organizaciones violentas ilegales, incluyendo su vulnerabilidad, con el fin de anticipar mejor los brotes violentos y proteger a las comunidades locales.

- 2 Reconocer las agendas políticas y las soluciones prácticas ofrecidas por los grupos armados ilegales. Esto incluye al ELN, y también los grupos de derecha que pueden usar una agenda política fijada localmente para obtener beneficios económicos.
- 3 Mapear la presencia de actores violentos al margen de la ley y las áreas en las que ejercen el control social. No se debe centrar exclusivamente en el uso de la violencia, sino que debe incluir además el uso de medidas como impuestos, provisión de seguridad y servicios básicos. Se debe incluir también una evaluación de la forma en que las comunidades cuestionan las normas que les imponen grupos violentos no-estatales.
- 4 Identificar los agentes que pueden facilitar acuerdos entre los grupos armados ilegales para proporcionar servicios y protección a las comunidades en las que ellos están inmersos.
- 5 Abordar el “efecto globo” en el que los grupos violentos se trasladan a nuevas ubicaciones en donde esperan operar libremente. Las regiones que actualmente no se ven afectadas por los actores armados pueden convertirse en lugares aptos para reagruparse después del desarme; un ejemplo de ello es la Alta Guajira, donde la ausencia del Estado y la facilidad de hacer dinero bajo medios ilícitos puede convertirse rápidamente en un hábito aceptado como norma.
- 6 Fortalecer los sistemas de alerta y respuesta temprana, el poder judicial la Procuraduría General de la Nación con el fin de prevenir la violencia, proteger a los civiles, hacer frente a la corrupción y ser capaces de perseguir eficazmente spoilers y organizaciones criminales.
- 7 Asignar recursos suficientes para el programa de reintegración con el fin de minimizar el número de ex combatientes que participan en la violencia y el crimen.

3 De la delincuencia organizada transnacional a las oportunidades económicas transfronterizas legales.

Contexto

La política fronteriza actual (por ejemplo el documento CONPES del Ministerio de Relaciones Exteriores ‘Prosperidad para las fronteras de Colombia’) se refiere a la frontera como una *línea* sobre la cual aplicar “seguridad nacional” en lugar de una *área* en la zona fronteriza en la cual promover seguridad ciudadana.

Casi no existen planes de contingencia integrales para prevenir las crisis de actividades transfronterizas ilícitas y de inseguridad. Por ejemplo, en agosto y septiembre de 2015 miles de colombianos fueron deportados desde la zona fronteriza con Venezuela. Si bien existe un plan de contingencia para crisis migratorias en la frontera en Norte de Santander, otras regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador carecen de dichos planes.

Desafíos para las políticas fronterizas en el periodo del post-acuerdo.

- 1 La reapertura de la frontera podría dar lugar a una afluencia de venezolanos entrando en Colombia. Sin planes de contingencia, tales movimientos en la frontera podrían tener un efecto desestabilizador.
- 2 Diversos grupos ilegales se moverán a regiones con una escasa presencia del Estado y cruzarán las fronteras, de igual manera lo pueden hacer ex combatientes que rechazan el desarme. Por ejemplo, al adquirir propiedades en Venezuela y al trasladar allí sus familias, pueden consolidar su poder en ese país. Inclusive, la situación de inestabilidad en Venezuela facilita aún más las actividades transfronterizas ilícitas y proporciona un refugio seguro para estos grupos al margen de la ley. Algunos de ellos pueden decidir participar nuevamente en actividades ilícitas en Colombia y ejercer su autoridad ilegal de carácter transfronterizo.
- 3 Los ex militantes de las FARC pueden reorganizarse en nuevos grupos cerca de las fronteras, debido a las oportunidades económicas ilícitas, la débil presencia del Estado y la impunidad que dichas zonas proporcionan.
- 4 Algunos ex combatientes intensificarían su participación en el tráfico de drogas y otras formas de crimen organizado en las zonas limítrofes con otros países, como una forma alternativa de ganarse la vida.
- 5 El deponer las armas puede conducir a la desviación de las rutas de tráfico de armas y municiones. El exceso de oferta, o armas ocultadas a la misión de la ONU, pueden ser re-dirigidas a nuevos cruces fronterizos, incrementando la vulnerabilidad de los habitantes involucrados en el comercio legal ejercido en estas zonas.
- 6 Habrá una reorganización de los participantes en las distintas rutas ilícitas, y las luchas de poder sobre los roles en el tráfico de drogas, el contrabando de gasolina, el tráfico de personas, la explotación sexual y otras formas de crimen organizado. Esto será particularmente notable en las zonas fronterizas.

Acciones para el gobierno y la comunidad internacional

- 1 Complementar la concentración en la seguridad nacional en las fronteras como demarcaciones territoriales para ser defendidas, con una visión integral de la misma, que tenga en cuenta las necesidades de las zonas fronterizas transnacionales - los espacios que necesitan ser regulados de manera adecuada con el fin de frustrar las actividades transfronterizas ilícitas por parte de grupos violentos ilegales.
- 2 Mediante la evaluación de las influencias económicas, culturales y políticas de cada lado de la frontera, trabajar hacia una aproximación complementaria de los servicios y funciones de gobierno tanto en el territorio colombiano como en los otros territorios.
- 3 Promover oportunidades legales a través de las fronteras para fomentar la credibilidad y la confianza popular en el gobierno colombiano.
- 4 Abordar el contrabando y otras actividades transfronterizas ilícitas tomando en consideración un contexto más amplio, sobre todo la falta de oportunidades económicas legítimas para las comunidades fronterizas.
- 5 Prestar atención de la ejecución de la ley, en los cruces fronterizos con aparentemente poco movimiento, que tienen, de hecho, una importancia estratégica para el tráfico ilícito.
- 6 Incitar a las ONG, la Iglesia, la academia y los grupos comerciales para ayudar a aumentar las oportunidades económicas transfronterizas sostenibles en las zonas de frontera.
- 7 Preparar planes de contingencia a nivel local y nacional para prevenir respuestas ad hoc (temporales) e inadecuadas a futuras crisis. Esto incluye la planificación para situaciones tales como la reciente escasez de agua y la desnutrición en La Guajira.
- 8 Aumentar la cooperación bilateral con Ecuador y Venezuela a través del trabajo conjunto de la policía y/o fuerzas militares especiales en las fronteras.
- 9 Colaborar con las oficinas de la ONU, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales en el lado no-colombiano para mapear la influencia transfronteriza ilícita y la autoridad de los agentes violentos no-estatales.

- 10 Promover acuerdos locales para formalizar el acceso transfronterizo a la escuela y servicios de salud, con el fin de crear sinergias en lugar de competencia de manera transversal en la frontera.
- 11 Proporcionar servicios de radio, televisión e Internet en las zonas fronterizas, donde las personas actualmente sólo reciben información de los canales no colombianos, con el fin de potenciar el sentimiento de pertenencia con el Estado colombiano.
- 12 Fortalecer la presencia civil y militar del Estado en zonas de importancia estratégica para el tráfico ilícito de drogas, incluyendo Tumaco, Cúcuta, San Miguel y Maicao.

GUAJIRA

FARC y ELN actualmente controlan amplios territorios en la región colombiana del Bajo Guajira en el que exigen a la población local el pago de impuestos y deciden sobre las normas de convivencia. A cambio, permiten a la comunidad vivir sin ningún tipo de problemas de seguridad - siempre y cuando se cumplan las reglas. Sin embargo, hay muchos informes de incidentes violentos perpetrados por los rebeldes y otros grupos ilegales en la zona fronteriza de Venezuela, que en su mayoría pasan desapercibidos por la comunidad internacional.

Asegurar la Aprobación Popular para el Cambio Positivo

Las acciones mencionadas anteriormente deben basarse en el apoyo de los colombianos. Por lo tanto, un “sí” como resultado del voto popular es la clave para avanzar en el post acuerdo de paz.

La gente en las regiones rurales marginadas es reacia a votar por la paz debido a la incertidumbre a la que se enfrentan. Sin saber lo que traerá la paz, y si la situación puede deteriorarse, pueden considerar preferible mantener el status quo.

El gobierno necesitará inculcar a estas poblaciones que votar a favor de la paz producirá un cambio positivo. Esto se puede hacer de la siguiente manera:

- 1 Participar en un diálogo con la población rural. Esto debe ir más allá de enviar mensajes desde Bogotá, y debe incluir las lenguas indígenas, para mostrar un compromiso real con esos territorios.

2 Demostrar que, como ciudadanos del Estado colombiano, sus voces y preocupaciones son tan valiosas como las de los habitantes de ciudades más grandes.

3 Dar ejemplos concretos de cómo la vida va a cambiar y cómo puede ser mejor - no sólo a corto plazo sino también a largo plazo.

Este informe es el resultado de un estudio minucioso de las zonas fronterizas de Colombia llevado a cabo entre los años 2010 y 2016. Incluye más de un año de trabajo de campo durante el 2011 y el 2013 en las zonas fronterizas colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana, y varios viajes de seguimiento.

Se basa en los datos recogidos en más de 500 entrevistas con actores locales, incluidos ex combatientes, desplazados, campesinos, indígenas y líderes afro-colombianos, representantes de la sociedad civil, clérigos, militares y policías, miembros del personal de las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y académicos.

Referencias

1. Idler, A (2014). "Arrangements of Convenience: Violent Non-state Actor Relationships and Citizen Security in the Shared Borderlands of Colombia, Ecuador and Venezuela." Doctoral Thesis, University of Oxford.
2. Idler, A. (2015). "Espacios Invisibilizados: Actores Violentos No-estatales en las Zonas Fronterizas de Colombia", in *Las Agendas de lo Indígena en la larga era de Globalización*, eds. Köhler, R. and Ebert, A. (Berlin: Gebr. Mann Verlag).
3. Idler, A. & Forest, J.J.F. (2015). "Behavioral Patterns among (Violent) Non-state Actors: A Study of Complementary Governance," *Stability: International Journal of Security and Development*. 4, no 1. <http://dx.doi.org/10.5334/sta.er>

Dr Annette Idler es la Directora de Estudios del Programa de Carácter Cambiante de la Guerra en Pembroke College e investigadora asociada en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Además es Investigadora Asociada en el Centro en Conflicto, Desarrollo y Construcción de Paz del Graduate Institute Geneva. Su trabajo se centra en las relaciones entre el conflicto, el crimen organizado transnacional y la seguridad, y el rol que los grupos violentos no-estatales juegan en estas dinámicas.

Dr Idler quiere agradecer a Paula Meléndez y a Simón Escoffier por su excelente apoyo investigativo, y a Mónica Pérez Alarcón por su apoyo en la versión española de este documento.

Para un análisis más detallado contactar a Dr. Annette Idler en el correo electrónico: annette.idler@politics.ox.ac.uk

Dr Annette Idler tiene el apoyo de un Fellowship de Ciencias Sociales para el intercambio de conocimiento, financiado por los Fondos de Educación Superior e Innovación.